

En el resto del libro se plantean cuestiones complejas y de actualidad: el poder de los tecnócratas para ‘redirigir’ la situación y el consiguiente menoscabo en la democracia, el problema acuciante del paro en Europa, con especial preocupación en el sector de la juventud, el (supuestamente) insostenible gasto social y merma en la calidad de vida, etc.

En resumen, estamos ante poco más de trescientas páginas de contenidos actuales, quizá no lo ortodoxas que debieran desde el punto de vista estilístico y formal, pero amenas y fundamentadas. En todo caso, esperemos que Hewitt se equivoque en su pesimismo y Europa (y Alemania) sean capaces de tener ‘altura de miras’, porque, de otra manera, nos espera un futuro muy incierto a la gran mayoría de personas que aún vivimos en este continente.

Juan, Jorge: *Nada es gratis, cómo evitar la década perdida tras la década prodigiosa*. Barcelona, Destino, 2011, 250 páginas.

Por Charo Guimarey.
(UNED, A Coruña)

Nada es gratis, cómo evitar la década perdida tras la década prodigiosa (Ed. Destino, 2011), es el título de un libro escrito por un grupo de seis economistas de FEDEA bajo el pseudónimo de Jorge Juan. A través de estas páginas (y tomando como referencia el blog del cual el libro coge prestado el nombre) analizan la situación económica actual de España, partiendo de sus orígenes, para plantear una serie de propuestas de actuación en diversos ámbitos a fin de salir del marasmo en el que hoy día nos encontramos.

El libro se estructura en tres partes diferentes. La primera de ellas comprende los cuatro primeros capítulos, y explica de forma amena y sencilla, sin necesidad de recurrir a tecnicismos, los desencadenantes de la crisis, así como el proceso por el cual una crisis de deuda privada, que alcanzó el 177% del PIB en 2009, ha derivado en una crisis de deuda pública. La entrada de España en la UE supuso un mayor acceso al capital, de manera que empresas y familias pudieron endeudarse a un precio menor. ¿Para qué? Fundamentalmente para adquirir vivienda, negocio de constructores y promotores y de cuya financiación se encargaban bancos y cajas (precisamente su expansión se basó fundamentalmente en los activos inmobiliarios).

Esos bancos y cajas necesitaban obtener financiación, recurriendo para ello a los mercados internacionales. Asimismo, en España confluyeron una serie de factores que contribuyeron a que se produjera la burbuja: una caída de los tipos de interés más intensa que en otros países, la “manía” española de invertir en inmuebles, y el factor demográfico: la generación resultado del “baby boom” de los 70’, el aumento de los divorcios y una mayor inmigración.

Así pues, gran parte de la crisis actual se debe al endeudamiento, que trajo como resultado un acusado desequilibrio respecto al exterior, frente a los inversores que compraban la deuda que bancos y cajas emitían para poder seguir financiando a su vez hipotecas y préstamos. Es precisamente este endeudamiento con el exterior lo que conecta la crisis financiera mundial con la española: los créditos de los inversores extranjeros se reducen y con ello se ven afectadas empresas y particulares, debido a la falta de financiación propia de las entidades financieras. Ante los problemas, el Banco de España y el gobierno llevaron a cabo un plan de reestructuración, que se quedó en la superficie y no permitió superar ciertos escollos (por ejemplo la persistencia del gobierno corporativo de las cajas).

La segunda parte del libro aborda la situación de nuestras finanzas públicas, tanto a corto como a medio y largo plazo. Afirman los autores que España tiene un serio problema de déficit estructural, y no sólo de deuda. Existen tres formas de reducir ese déficit: disminuyendo el gasto público, aumentando los impuestos, y volviendo de nuevo a un crecimiento suficiente como para no tener que incurrir en las otras dos alternativas. Lamentablemente dada la situación actual, no se prevé que esto se vaya a cumplir, por lo que la consolidación fiscal, dicen los autores, se configura como la opción más probable. Uno de los temas que abordan en esta sección es el de las pensiones y la sanidad, dados los costes que suponen para el sistema de seguridad social. Por ello consideran fundamental reformar el sistema de pensiones: mayores retrasos en la edad de jubilación y cambios en los sistemas de cómputo. Lo mismo ocurre con el sistema sanitario, cuyos gastos se incrementan de forma continua debido al envejecimiento de la población, y también a unos medios de atención cada vez más costosos. Para hacer frente a este incremento en continuo

de los gastos es necesaria una correcta gestión de los recursos, además de asumir una serie de medidas para controlar el gasto, entre las que proponen el copago.

También dedican un tema al gasto de las autonomías, al partir del presupuesto de que uno de los principales problemas es que los ingresos de las CC.AA. dependen, al menos hasta la liquidación de las cuentas según los plazos señalados, de lo presupuestado por el Estado y no de lo recaudado. Ello significa que aunque exista una situación de recesión, no van a ser las CC.AA. las primeras en ajustar las cuentas; por ello suponen uno de los principales obstáculos en el camino ya citado de la consolidación fiscal.

La tercera y última parte del libro aborda los temas relacionados con el modelo de crecimiento seguido hasta ahora, su agotamiento, y los cambios necesarios sobre los que fomentar un nuevo crecimiento, incluyendo aspectos fundamentales relacionados con éste como la educación, las reformas en el mercado laboral o la innovación. Es quizás la parte del libro más comprometida, en donde se aprecia un posicionamiento más claro de los autores, y que puede dar lugar a una mayor discusión.

A grandes rasgos este es el contenido del libro, un libro que de entrada resulta atractivo, por la claridad y por la utilización de ejemplos comprensibles para el ciudadano de a pie. Pero el meollo no está en la explicación de la crisis, en la que coincide prácticamente todo el mundo; sino hacia la mitad del libro, cuando comienza un análisis más sesudo de los problemas estructurales del país y de qué podemos hacer para superarlos. Es aquí cuando se pone de manifiesto la idea dominante en torno a la cual giran todas las propuestas: hay que reducir el gasto para poder hacer frente a la deuda. Sí, también se habla de crecimiento (de hecho los autores dicen que las propuestas planteadas se basan en ese principio), pero lo cierto es que, cómo no es probable que al menos a corto plazo vayamos a crecer, consideran que no queda más remedio que aceptar la consolidación fiscal...

Cuestión discutible si tenemos en cuenta de que se trata de la premisa fundamental del gobierno actual, y cuyos resultados vemos hoy día: una cada vez menor capacidad adquisitiva de la población, con una clase media que tiene a la desaparición dada la mayor polarización de las

rentas, un continuo aumento del desempleo, un recorte del gasto público que empieza a ser peligroso, y que sirve para justificar la privatización de ciertos servicios públicos...

Pero vayamos por partes. Dicen los autores que

“España se ha convertido en uno de los países con mayor nivel de endeudamiento de Europa, principalmente por culpa de las familias y las empresas” (pág. 63).

Sabemos que nos hallamos ante una crisis de deuda privada que ha dado lugar a una crisis de deuda pública; pero tal afirmación es necesario matizarla. En primer lugar porque familias y empresas (y al margen de la conciencia y del nivel de vida que algunos hayan querido llevar para aparentar) han tenido que endeudarse más porque su capacidad adquisitiva se ha visto reducida, sobre todo desde la entrada en el euro. Incluso los autores afirman que es necesario reducir los salarios, especialmente en lo que se refiere a funcionarios. Lo que no dicen es que España es el único país de la OCDE donde no se ha producido un incremento real de los salarios en los últimos quince años; y desde luego no es para olvidar que el endeudamiento lo han permitido y estimulado unas entidades financieras que buscaban sacar el máximo beneficio y ante las cuales los reguladores, como el Banco de España (al que por cierto liberan de toda responsabilidad y cuya actuación justifican), hicieron la vista gorda. Ahora bien, es evidente que familias y empresas están pagando con creces “los excesos” cometidos; sin embargo no se ha cambiado nada para exigir responsabilidades a los organismos y políticos que no hicieron lo que su cargo exigía (y por el cual cobran bastante más que un funcionario), ni tampoco a unas entidades a las que se inyectaron miles de millones que no se han utilizado para hacer que vuelva a fluir el crédito hacia unas empresas que al fin y al cabo, son las que pueden generar empleo.

Al menos los autores si contemplan la posibilidad de que se produzcan las bancarrotas, de manera que las entidades insolventes no sigan absorbiendo recursos del sistema y paguen por sus excesos. Pero en sus propuestas de reforma del sistema financiero dejan al margen un punto que es fundamental: una mayor regulación de los movimientos del capital, que es la manera de poner punto final a los paraísos fiscales.

¿Y de dónde se puede recortar? Hay tres temas en el libro dedicados a este aspecto: el de las pensiones, el de la sanidad y el de las finanzas autonómicas. En el caso de los dos primeros, por el gasto público que suponen, siendo por tanto un impedimento para hacer frente al déficit. Estoy de acuerdo con que es necesaria una reforma de las pensiones, y que se puede ampliar la edad de jubilación tal y como propone Jorge Juan (atendiendo por supuesto a criterios de cómputo); al fin y al cabo, es casi una consecuencia de la mejor calidad y del aumento de la esperanza de vida media que han fomentado los avances en materia de sanidad, y especialmente, una sanidad universal y gratuita. Dicen los autores que es preferible reducir el gasto en pensiones que aumentar los impuestos para financiarlas, pues el malestar sobre la población sería menor. Desde luego ni lo uno ni lo otro sería necesario si lográramos unos buenos niveles de productividad económica. En cualquier caso no podemos olvidar la cantidad de familias que en la coyuntura actual viven de la pensión de sus mayores; además, ¿cómo no va a ser objetivo de una familia comprar una vivienda? La compensación actual de las pensiones en la mayoría de los casos dificulta el hacer frente a un alquiler, a las necesidades básicas y cómo no, al pago de medicamentos.

Volviendo al tema de la sanidad, garantizar su universalidad y gratuidad es fundamental. Se ha conseguido hasta ahora mantener el mejor sistema sanitario de Europa con una partida presupuestaria de las más bajas. Cierto es que si aumenta la población anciana los gastos irán en aumento; pero creo que es posible otra manera de hacer frente a los gastos sin necesidad de recurrir a un copago (que en realidad sería un “re-pago”) de los servicios. Una mejor gestión de los recursos humanos (lo cual es posible sin tener que recurrir a recortes de plantilla o contratación) y materiales sería probablemente suficiente, además de la no politización de los cargos de gerencia. Invertir en programas de prevención y de educación para la salud es una de las medidas de ahorro más importantes con las que podemos contar.

En definitiva, no podemos recortar en aquellos aspectos que realmente funcionan y funcionan bien. Para que las cuentas salgan está claro que hay que crecer, y para ello es necesario cambiar el modelo en el que nos habíamos sustentado hasta ahora, y al cual Jorge Juan dedica un capítulo. Dicen los autores que España posee

dos sectores claves en los que se puede fundamentar buena parte de la recuperación: el sector de bienes exportables y el turismo por una parte, y el sector servicios por otra. Curiosamente actividades que forman parte del modelo agotado, y que producen una economía de escaso valor añadido. Desde luego pueden ayudar al crecimiento, pero con una reorientación de la oferta, y nunca como pilar básico, puesto que son actividades demasiado dependientes del ciclo económico. En lo que sí estamos de acuerdo es en fomentar la innovación, fundamental para incrementar la productividad y también la competitividad sin tener que recurrir a la reducción de salarios. La inversión en I+D+i así como en educación debería ser una de las medidas más importantes a contemplar por parte del gobierno de un país para superar la situación de crisis. Es evidente que el sistema educativo necesita una reforma, tanto a nivel de enseñanza primaria como secundaria (incluyendo la FP) y también universitaria. Pero las propuestas de Jorge Juan respecto a este tema son inauditas, apoyándose en una serie de estudios internacionales para defender medidas como la siguiente:

“implantemos un carné por puntos en educación. Aquellos padres cuyos hijos no se comporten van perdiendo puntos. Esto puede traducirse en una subida de impuestos: el niño genera un efecto externo sobre terceros, y el responsable legal debe hacerse cargo” (pág. 180).

En cuanto a los incentivos para los profesores, proponen transformar una parte del sueldo en un complemento de productividad a cobrar en función de los resultados obtenidos por los alumnos. No podemos “economizar” la educación de esta manera, ni tampoco fomentar la segregación de alumnos que tendría lugar con estas medidas.

Respecto a la reforma del mercado de trabajo el capítulo se caracteriza por un ataque sistemático a la legislación laboral (la vigente antes de la última reforma llevada a cabo por el gobierno actual): las prestaciones por desempleo y las políticas activas, la negociación colectiva y las indemnizaciones por despido a los trabajadores, las cuales según se afirma, dotan al sistema de una gran rigidez. ¿Y qué se puede hacer entonces? La solución planteada es una mayor flexibilidad, que en parte consistiría en una moderación de los salarios y una disminución de

los costes de despido, con la finalidad de estimular la contratación por parte de las empresas. Esta fórmula ha sido adoptada por el gobierno en la reforma laboral de este año, y al menos de momento, no ha permitido poner fin a la espiral creciente de desempleo.

Las conclusiones sirven para recalcar la idea subyacente a lo largo del libro:

“no nos queda más remedio que cumplir el objetivo de déficit acordado con la Unión Europea y continuar la consolidación fiscal” (pág. 234).

Ante esta afirmación quiero poner de resalte dos cuestiones: en primer lugar, que la reducción del gasto público no parece que vaya a facilitar la recuperación económica, pues tal y como estamos viendo, da lugar a una mayor precariedad económica de la población española, lo que desincentiva la demanda y por lo tanto compromete el crecimiento.

Y relacionado con ello, que si bien es fundamental la economía de cara a los mercados del exterior, no por ello podemos descuidar el mercado interno, a fin de cuentas, el 80% del tejido empresarial de este país está compuesto por pequeñas y medianas empresas que no viven de las exportaciones, sino del mantenimiento de la demanda interna. En estas circunstancias no es de extrañar la destrucción masiva de empleo que se ha producido.

Para terminar, una última anotación: los autores señalan en el capítulo introductorio que su objetivo es realizar un análisis económico y no ideológico. Y también se olvidan de la cuestión social.

Un abordaje estrictamente económico de la situación carece de sentido, ya que cualquier clase de medida económica repercute directamente en la población, que a fin de cuentas es quién puede proporcionar la base para volver a crecer. Por eso habrá que valorar qué debemos anteponer a qué: si los mercados a las personas, o las personas a los mercados.

Lemus, Encarnación. *Estados Unidos y la Transición española. Entre la Revolución de los Claveles y la Marcha Verde*, Madrid, Sílex/Universidad de Cádiz, 2011. 316 pp.

Por Rafael Quirosa-Cheyrouze y Muñoz.
(Universidad de Almería)

Hace ya mucho tiempo que asumimos que no se puede entender el análisis de un período histórico sin tener muy en cuenta el marco de las relaciones internacionales y la política exterior de los distintos países protagonistas de los procesos estudiados. En el caso español, de hecho, la labor de los investigadores que trabajan en esta parcela ha ido incrementándose de manera significativa en las últimas décadas, como prueban los éxitos de las actividades promovidas por la Comisión Española de Historia de las Relaciones Internacionales (CEHRI), una asociación que lleva casi un cuarto de siglo impulsando esta disciplina historiográfica.

En el caso de la transición a la democracia vivida por los españoles tras la muerte del general Franco, la incorporación de las cuestiones internacionales forma parte ya del bagaje bibliográfico imprescindible para una explicación que pretenda ofrecer una visión completa del citado proceso histórico. Autores como Juan Carlos Pereira, presidente de la CEHRI desde 1998, Josep Sánchez Cervelló, Charles Powell o la propia Encarnación Lemus, autora del libro que estamos reseñando, han firmado un buen número de trabajos sobre algunos aspectos que vinculan el cambio político en España con lo que sucedía en otras latitudes. Si Pereira incluía un artículo muy significativamente titulado “Transición y política exterior: el nuevo reto de la historiografía española” en el dossier del número 42 de la revista *Ayer* en 2001, ese mismo año Lemus publicaba *En Hamelin (...) la transición más allá de las fronteras*, un clásico de obligada consulta para cualquier investigador o interesado en el tema.

Desde ese momento, la profesora Lemus, catedrática de Historia Contemporánea en la Universidad de Huelva, ha ofrecido aportaciones de valía que nos han acercado a las posiciones de las potencias occidentales ante la democratización española o la visión que